

FORMULARIO PARA EL INGRESO DE CAUSAS (Acordada 72/2001)

DATOS A INCORPORAR – MESA DE ENTRADAS CIVIL

EXPTE. N°				
		DESCRIPCIÓN		
1.-	OBJETO DEL JUICIO			
		DESCRIPCIÓN		
2.-	MODO DE PROCESO			
3.- DATOS ABOGADO/S				
Apellido/s y Nombres	P/A*	Domicilio/s Constituidos	Localidad	Casillero
FIGUEROA MARIA CECILIA	A	AV. SARMIENTO 856	AGUILARE S	27319024315

\* Patrocinante / Apoderado

4.-	DEFENSORIA	Nro.:
-----	------------	-------

5.- ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES

Apellido/s y Nombres	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N° de Doc.	N° de CUIT
GORDILLO SILVIA CAROLA	Av. Alem ultima cuadra S/N, Barrio Tagusa Norte	AGUILARES		27242794023

6.- DEMANDADOS (Datos Conocidos)

Apellido/s y Nombres	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N° de Doc.	N° de CUIT
POPUL A.R.T. (CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN)	24 de Septiembre N° 942	San Miguel de Tucuman		30517999551

7.-	FUERO DE ATRACCIÓN
JUZ.	EXPTE. CONEXO
	...../.....

8.-	OFICIOS LEY 22.172
Juez oficiante:	
Juzgado y Fuero:	
Jurisdicción:	

9.-	MONTO DEL JUICIO		10.-	TASA de JUSTICIA		11.-	BONOS PROF.		12.-	LEY 6.059	
\$	USD	IMPORTE		Abona Tasa mínima:			ADJUNTA			ABONA	
				Abona Tasa íntegra:			NO ADJUNTA			NO ABONA	
				Exenta de pago							

LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

...../...../.....  
FECHA

.....  
FIRMA Y SELLO DEL LETRADO DECLARANTE

**INICIO DEMANDA.-**

**SR. JUEZ DE CONCILIACION Y TRAMTE DE TURNO.-**

**JUICIO: "GORDILLO SILVIA CAROLA C/ POPUL A.R.T. (CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN) S/ COBRO DE PESOS".**

**MARIA CECILIA FIGUEROA**, Abogada, con domicilio digital en 27-31902431-5, ante V.S. me presento y digo:

**I- PERSONERIA.-**

Que conforme surge del Poder Ad litem que acompaño soy apoderada de Sra. GORDILLO SILVIA CAROLA, DNI 24.279.402, cuyos demás datos personales constan en el instrumento acompañado. Declaro bajo juramento la autenticidad y vigencia del mismo, solicitando se me otorgue intervención de ley.-

**II- LEGITIMACION ACTIVA.-**

Mi Mandante convivio con el Sr. ALBERTO ANTONIO ABREGU desde el mes de Septiembre del 2013 hasta la fecha de fallecimiento del mismo ocurrido en fecha 10 de Junio del 2021, conforme consta en Sentencia de Información Sumaria N° 402 -Juicio: GORDILLO SILVIA CAROLA S/ INFORMACION SUMARIA, tramitado ante el Juzgado de Conciliación y Tramite de la II Nom, EXPTE.: 23/22, de este Centro Judicial y es en tal carácter que vengo a iniciar la presente acción, conforme el art. 18 inc. 1 de la Ley 24557 que expresamente establece: "... **Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el art. 53 de la ley 24241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas.. 1. La Viuda, 2. El viudo, 3. La conviviente, 4. El Conviviente...**" .-

**III - OBJETO.-**

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda judicial por cobro de pesos en contra de POPUL ART, con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 942 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, compañía ante la cual el empleador del Sr. Abregu, SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, tiene asegurada su responsabilidad por riesgos del trabajo, persiguiendo la suma de \$ 7.379.629 (siete millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos veintinueve), o lo que en más o menos resulte de las pruebas a rendirse en la etapa procesal oportuna, todo ello EN UN SOLO PAGO y en concepto de indemnización por muerte derivada de la enfermedad profesional contraída por el Sr. Abregu, o lo que SS justiprecie conforme a sus facultades, solicitando además sus intereses y costas del juicio.-

### **III- HECHOS.-**

El conviviente de mi poderdante quien fuera en vida ALBERTO ANTONIO ABREGU, DNI 13.513.840, con domicilio en Av. Alem ultima cuadra S/N (ex calle Mataderos S/N ultima cuadra), del Barrio Tagusa Norte, de la ciudad de Aguilares, fue docente desempeñándose como M.E.P. del Taller de Electricidad de Automotor en la ESCUELA C.F.P. N° 1 HUMBERTO U. REYES; sita en Alsina N° 1057, Aguilares; por su labor el mismo percibía una remuneración bruta de \$ 51.475,83 mensuales.-

### **ANTECEDENTES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO.**

Por imposición de la normativa de Riesgos del Trabajo vigente, el empleador contrato a la empresa demandada CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN (POPUL ART).-

### **LA ENFERMEDAD PROFESIONAL.-**

A principios de Mayo del año 2021, hubo un brote de COVID-19 en el establecimiento escolar donde se desempeñaba el Sr. Abregú, el cual afectó a varios docentes, incluido él. Tal es así, que el día 7 de mayo del referido año, en ocasión en que el Sr. Abregu se encontraba trabajando; presentó síntomas compatibles con el COVID-19, por lo que se dirigió al Hospital de Aguilares a fin de que se le practique el hisopado correspondiente; arrojando resultado positivo. Es por ello que cumplió dos semanas de aislamiento en su domicilio, yendo a control al Hospital de

Aguilares donde, transcurrido dicho plazo le dieron el alta. Pues bien, al no notar mejoras, se realizó estudios y al continuar deteriorándose su salud, en fecha 25 de mayo lo internan en el Hospital de Aguilares; luego de lo cual requirió ingreso a terapia intensiva por lo que fue trasladado al Sanatorio Mitre donde permaneció 10 días. En fecha 5 de junio se agravó su estado por lo que ingresó al Sanatorio Mayo de la ciudad de Concepción a terapia intensiva, dos días después lo intubaron y finalmente fallece el 10/06/2021.

En virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propagación de covid-19, en nuestro país el Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 260/2020, dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. Esta medida fue sucesivamente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022.

Mediante el Decreto N° 297/2020 se estableció la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 y, finalmente, hasta el 31 de enero de 2021.

En un contexto que demandaba fuertes medidas preventivas basadas principalmente en restricciones a la circulación y, asimismo, el funcionamiento de las actividades esenciales y productivas básicas, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante *Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020, dispuso considerar al covid-19 -en base a una presunción de pleno derecho- como una enfermedad profesional no listada* respecto de todos los trabajadores dependientes excluidos, mediante dispensa legal -y con el fin realizar actividades declaradas esenciales- del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normas complementarias, mientras se encontrara vigente la medida de aislamiento oportunamente dispuesta.

En ese marco de restricciones denominado “ASPO”, en el que los desplazamientos debían limitarse al estricto desempeño de las actividades y servicios especialmente autorizados, permitía presumir, con una muy alta probabilidad de acierto, que quienes se contagiaban lo hacían por salir a cumplir con sus obligaciones laborales. Por ello se dispuso que frente al padecimiento de la enfermedad covid-19 fuera el sistema de riesgos del trabajo el que brindara cobertura a las personas afectadas al cumplimiento

laboral de las actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia, para cuya prestación y traslado debían tramitarse las correspondientes autorizaciones.

Con posterioridad y a medida que paulatina y progresivamente se fueron liberando y autorizando más actividades productivas, se perfeccionaron e implementaron –de común acuerdo entre gobiernos, sindicatos y empresas– protocolos preventivos que permitieron eficaz y eficientemente, según todos los estudios realizados, contar con lugares de trabajo de muy baja incidencia de contagio que permitieron, por consiguiente, abrir más la economía. *La contracara de esta apertura hizo necesario extender la cobertura de riesgos del trabajo a aquellos trabajadores que hubiesen prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales*, fuera de su domicilio particular. En esa inteligencia, fue dictado el **Decreto de necesidad y Urgencia N° 39/21, que amparo al universo total de trabajadores bajo las condiciones señaladas, más allá de que fueran o no esenciales.**

Por su parte, el art 3 de la ley 26.773 establece: “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador, víctima o derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las formulas allí previstas, equivalentes al 20 % de esa suma.”

Es por ello que solicito se haga lugar a la presente demanda, con expresa imposición de costas a la demandada.-

#### **IV-INCONSTITUCIONALIDADES:**

##### **1) Competencia del Tribunal - Inconstitucionalidad del art 46 LRT**

Pido se declare la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T. por violatoria al art. 18 de la CN. De acuerdo a dicha norma, en caso de discrepancia entre el trabajador y la ART, el reclamo debe hacerse ante la Comisión Médica local, el cual es un organismo integrante de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es a su vez un ente autárquico con funciones de control sobre la materia.-

Siguiendo al citado artículo, si el trabajador o la ART no estuvieran de acuerdo con la resolución de la Comisión Médica, debe recurrir ante el Juzgado Federal de la jurisdicción territorial del lugar de trabajo, confiriéndose de este modo el carácter de sentencia de primera instancia a tal resolución.

Así las cosas, los fundamentos de nuestra organización constitucional mencionados ut supra resultan vulnerados por el Art. 46 de la LRT, en cuanto el mismo consagra la competencia de la Justicia Federal para entender en cuestiones de accidentes y enfermedades del trabajo, sustrayendo de ese modo al trabajador del juez natural establecido para conocer sobre el reclamo (Art. 18 de la C. N.).-

Siendo la presente una cuestión de carácter común, y encontrándose las cosas y personas dentro del ámbito de jurisdicción local, con arreglo a lo dispuesto por el Art. 75 inc. 12 de la CN, corresponde su aplicación y dilucidación a los tribunales provinciales.-

2) De la Inconstitucionalidad del art. 39, párrafo 1º de la L.R.T:

Dejo solicitada la inconstitucionalidad del art. 39 primer párrafo de la L.R.T, con los alcances que le otorgara la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos: "AQUINO", "DIAZ, TIMOTEO FILIBERTO", "AVILA JUCHAMI" Y "LLOSCO". La CSJ establece que el trabajador que cobro la indemnización de la ley especial, bajo reserva de que dicho monto era a cuenta de otro mayor para demandar por via civil. "Falzzoratti" abre la puerta a la via civil para los accidentes de trabajo

3) De la Inconstitucionalidad del art. 8 ap. 3, art. 21 y 22 de la L.R.T.

El hecho de que mi poderdante no haya seguido el trámite establecido por los Art. 21 y 22 de la Ley de Riesgos de Trabajo, no puede ser considerado como un obstáculo para la procedencia de la presente acción.-

En lo concerniente a este hecho, tacho de inconstitucionales las normas contenidas en los arts. 8 ap. 3; 21 y 22 de la LRT, todo ello en base a los fundamentos que a continuación expondré:

1.- Inicialmente, señalo que el procedimiento que regulan las normas involucradas, es la antítesis del proceso laboral que tutela jurídica y procesalmente al trabajador para igualar su debilitada condición en las relaciones económicas y sociales.

En efecto, las simples características de dicho procedimiento obligan a la víctima del infortunio laboral a presentarse desamparada ante la ART y las comisiones Médicas creadas por la Ley 24.241 y ampliadas en su composición por la ART.

Dichas Comisiones Médicas actúan como falsos órganos judiciales, sin tener la aptitud, idoneidad y calidad necesaria, siendo solo médicos dependientes del Poder Ejecutivo nacional que carecen de capacidad profesional para discernir sobre la relación de causalidad existente entre la actividad del trabajador y el daño padecido por el mismo, algo que es una cuestión estrictamente de injerencia jurisdiccional.-

Vemos así como la L.R.T. invistió a los profesionales del arte de curar de facultades jurisdiccionales exorbitantes, destinándoselo indebidamente a resolver conflictos jurídicos ajenos a su incumbencia específica y lesionando el principio de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, consagrados por la Constitución Nacional.

Se infringe el art. 109 de la C.N. al otorgar potestades jurisdiccionales a órganos administrativos federales designados por el PEN con exclusión de los jueces del Trabajo de cada Provincia (art. 5, inc. 2º, art. 21, inc. 2º y art 46 de la Ley 24.557.

El procedimiento carece de garantías para el trabajador, ya que los médicos carecen de aptitud para resolver las relaciones de causalidad entre daño y actividad, que resulta una función jurisdiccional excluyente. Esta falta de seguridad se ve acrecentada por cuanto el damnificado tiene un recurso de apelación limitado, no pudiendo agregar prueba que no haya ofrecido inicialmente, tratándose en el caso de un "formulario" que debe completar el trabajador sin patrocinio jurídico.

Los médicos integrantes de las Comisiones Médicas son designados por el PEN y tiene una relación de empleo privada

con la SRT (art. 38, apartado 3° de la LRT). Esta falta de estabilidad del empleo público, conspira contra su independencia de criterio.

A partir del fallo "Castillo" de la Corte Suprema, el trabajador podía presentarse ante cualquier Tribunal del país sin necesidad de transitar previamente por las comisiones médicas, reguladas por los art. 21 y 22 de la LRT. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Castilolo", "Venialgo" y "Marchetti", constituyen un conjunto armónico que determina la inconstitucionalidad de los art. 21, 22 y 46; inc. 1° de la LRT. Y de las normas correspondientes del decreto PEN 717/96.

En consecuencia: surge como doctrina de aplicación a todos los tribunales del país, que las Comisiones Médicas creadas por la LRT, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales y los trabajadores o derechos habientes, pueden concurrir directamente ante los tribunales del trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que atravesar el procedimiento ante las comisiones médicas.

2.- Del mismo modo y en sustento de la petición de inconstitucionalidad que aquí se esgrime, hago propios los argumentos vertidos por la Excma. Cámara del Trabajo de la Provincia, volcados en sentencia de fecha 26/06/2006, donde se expresa:

"El Art. 6 de la Ley 14.557 define que debe entenderse por accidente de trabajo y enfermedad profesional en los inc. 1 y 2. El inc. 2) como ya dijera, en forma reiterada resulta inconstitucional ya que solo considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elabora y revisara el poder ejecutivo con la salvedad del inc. 2 d) que deja a criterio de las Comisiones Médicas, la inclusión de las nuevas enfermedades profesionales. Esta parte del art. De referencia al establecer que solo se consideran enfermedades las comprendidas en el listado viola el art. 17 de la C.N., al cercenar in limine los derechos patrimoniales del trabajador damnificado. También otorga al P.E. las facultades de legislar y juez ya que decide que pretensiones son viables y cuales no, sin importar la legitimidad que pueda demostrar el trabajador damnificado. No se puede eludir la reparación del daño ocasionado por el



trabajo realizado, impidiendo a través de un listado, la reparación integral del daño. El art. 6 viola el art. 14 bis, 17 y 18 de la C.N., la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto de Costa Rica art. 8, 21 y 22.

La relación causal o concausal entre el trabajo y la dolencia e incapacidad no puede surgir de forma caprichosa de un listado restrictivo, ello atenta contra la seguridad jurídica, los derechos del trabajador consagrados en la C.N. y lo pone en un estado de indefensión que no comulga con los principios de la Seguridad Social y los ya enunciados derechos constitucionales, mas aun teniendo en cuenta el particular y nuevo escenario derivado del Covid, y la extensión de la cobertura de riesgos del trabajo a aquellos trabajadores que hubiesen prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular, sean o no esenciales, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 39/21 del Poder Ejecutivo.

Art. 8, 21 y 22, son inconstitucionales pues resulta irritó a la Constitución Nacional la competencia de las Comisiones Médicas excluyendo el fuero laboral Provincial, violando el principio federal. Las provincias quedan sin competencia. De esta forma los damnificados han sido sacados de sus jueces para ser sometidos a Comisiones especiales, violando el art. 18 de la C.N.

Los art. 21 y 22 de la LRT si bien no crean Comisiones Médicas porque ya existían por imperativo de la Ley 24.241, les dan oportunidad ante el siniestro laboral, dándoles las funciones que son propias del Poder Judicial. Se trata de verdaderas Comisiones especiales con facultades que solo son propias del juez natural. La función de las mismas deberá limitarse a determinar el grado de incapacidad y si la enfermedad tuvo como origen el trabajo realizado, dejando a los jueces determinar el análisis de los hechos que son propios de su función conforme a la Constitución.

Por lo expuesto los art. 8, 21 y 22 de la Ley 24.557 son Inconstitucionales. Art. 39: Ha consagrado un sistema cerrado que no le permite al trabajador recurrir a la vía civil, de modo tal que a esos efectos también ha reformado el art. 75 de la LCT. Con ello ha consagrado una verdadera desigualdad dejando como única posibilidad la del art. 1072

del CC. En otras palabras se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley que es de jerarquía constitucional. Cualquier ciudadano que sufre una incapacidad se encuentra en mejores posibilidades que un trabajador (art. 14 bis, 16 y 18 CN.). Con ello se consagra una verdadera discriminación, repugnante a nuestros derechos naturales y constitucionales.

Art.49: También resulta inconstitucional en cuanto requiere el procedimiento administrativo previo. Violando el derecho a la jurisdicción. Esta no es una ley administrativa, se la ha hecho así violando todos los principios constitucionales, aunque el primer párrafo actualmente resulta abstracto. No puede la ley exigir el procedimiento administrativo previo sacando a las partes de su juez natural\*."Excma. Cámara del Trabajo - DRES.: MORENO-RIOS. Sentencia N° 91. Fecha: 26/06/2006

**Considerando lo antedicho, más aún, en el caso en cuestión, tratándose de una enfermedad derivada del contagio del SARS-COV-2, teniendo en cuenta la situación absolutamente excepcional y de urgencia que generó; no pueden los derechos del trabajador verse restringidos a la declaración del carácter profesional de dicha enfermedad por parte de la Comisión Médica en el sentido de confirmar o no una presunción establecida por el Decreto 367/2020 del Poder Ejecutivo; estando acreditado que en el lugar de trabajo en dicha época se constataron numerosos casos. La precipitación de los hechos, en el sentido del avance del agravamiento del Sr. Abregú, fueron de tal premura que mal podría en aquellas circunstancias, exigirse el cumplimiento de todos los requisitos administrativos ante la Comisión Médica, a fin de no ver vulnerados sus derechos.**

### **INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ART. 14 Y 19 DE LA LRT.**

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es constitucional el pago de esta indemnización en forma de renta mensual tal como lo contempla la normativa relacionada.

En el caso Milone J.A. c/ Asociart ART S.A." la CSJN determino que tal modalidad afecta las garantías constitucionales del damnificado. El fallo reprocho la imposición absoluta sin alternativa y sin distinción del pago en

forma de renta, impidiendo que el trabajador pueda optar por percibir la indemnización en forma inmediata y en un pago único. Criterio seguido en Suares Guimbard c/ siembra” La CSJN declaro nuevamente la inconstitucionalidad del pago mediante renta periodica.

Todos los fallos obrantes en los diversos poderes judiciales del país, establecen que el art 14 es inconstitucional en cuanto colisiona con la libertad de contratar, con el derecho de usar y disponer de la propiedad, garantizados por los art 14 y 17 de la CN y que agravia el art 14 bis de la carta magna que establece que los beneficios de la Seguridad social tendrán el carácter de integral e irrenunciables y constituye una afrenta al art 16 de la CN que establece que todos serán iguales ante la ley, al discriminar con reparaciones misérrimas a los trabajadores por su condición de tal.

Todo ello se aplica en iguales términos al art. 14 y 19 de la LRT, el primero porque obliga a la contratación en renta y el segundo porque establece la modalidad de contratación de renta periodica y que en consecuencia vienen a completar el sistema cuya inconstitucionalidad solicito.-

**DEDUZCO INCONTITUCIONALIDAD art. 3 D.N.U. 367/20 y RESOLUCION 38/2020 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.-**

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a solicitar, se declare la inconstitucionalidad del Decreto 367/20, por violatorio del art. 18 de la C.N. , ya que en su art. 3 establece que “la determinación definitiva del carácter profesional del COVID-19 producida por el coronavirus SARS- COV-2, quedara a cargo de la COMISION MEDICA CENTRAL, establecida en el art. 51 de la Ley 24.241 la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1º del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1º ”. De esta manera, la denuncia y la determinación del carácter profesional o no de la enfermedad, deben hacerse

en la Comisión Medica local, el cual es un organismo integrante de la Superintendencia de riesgos del trabajo, que a su vez es un ente autárquico con funciones de control sobre la materia. Por su parte, la Resolución 38/2020 establece el procedimiento que debe llevarse a cabo ante la comisión médica para la denuncia, admisibilidad y posterior determinación del carácter profesional de la enfermedad, instaurando una nómina de requisitos que debe contener la denuncia; y el procedimiento que debe llevarse a cabo ante la Comisión Medica Central. Las normas involucradas, son la antítesis del proceso laboral que tutelan jurídica y procesalmente al trabajador para igualar su debilitada condición en las relaciones económicas y sociales. En efecto, las simples características de dicho procedimiento obligan a la víctima del infortunio laboral a presentarse ante la ART y las comisiones Médicas creadas por la Ley 24.241. Dichas Comisiones Médicas actúan como falsos órganos judiciales, lesionando el principio de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, consagrados por la Constitución Nacional. Se infringe el art. 109 de la C.N. al otorgar potestades jurisdiccionales a órganos administrativos federales designados por el PEN con exclusión de los jueces del Trabajo de cada Provincia. El procedimiento carece de garantías para el trabajador, los médicos integrantes de las Comisiones Medicas son designados por el PEN y tiene una relación de empleo privada con la SRT (art. 38, apartado 3° de la LRT). Esto conspira contra su independencia de criterio. A partir del fallo "Castillo" de la Corte Suprema, el trabajador podía presentarse ante cualquier Tribunal del país sin necesidad de transitar previamente por las comisiones médicas. En consecuencia: surge como doctrina de aplicación a todos los tribunales del país, que las Comisiones Medicas creadas por la LRT, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales y los trabajadores o sus derechos habientes, pueden concurrir directamente ante los tribunales del trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que atravesar el procedimiento ante las comisiones médicas. Así, la resolución 38/20 de la SRT (art 2), si bien no lo hace en forma expresa, deroga tácitamente el artículo 1 y 2 del DNU 367/2020 primeramente establece nuevos requisitos que el trabajador va a tener que cumplir para que se le puedan otorgar las prestaciones de ley exigiendo no solamente la constancia de diagnóstico sino que le adiciona múltiples requerimientos y exigencias formales que están determinadas en la citada resolución. Existe una derogación tácita dado que

la resolución 38/20 de la SRT establece que una vez que el trabajador haya cumplido con todos los requisitos formales referidos a la documentación que debe acompañar con la denuncia, se puede suscitar una controversia entre la ART y el trabajador donde la SRT tendrá un plazo de 48 horas para resolver y determinar si admite o no la denuncia, en caso de silencio se tendrá por aceptado pero en el supuesto de que hubiera un rechazo la resolución nada dice, pues, no hay vía recursiva alguna para el trabajador; dejándolo totalmente desprotegido, por lo que se infiere que tendrá que iniciar el procedimiento para las enfermedades no listadas, de manera que la cobertura no es tan automática como establece el DNU 367/20 en su artículo segundo ya que da lugar a que las ART. puedan generar controversias innecesarias que solo provocan dilataciones en perjuicio del trabajador.- Considerando lo antedicho, más aún, en el caso en cuestión, tratándose de una enfermedad derivada del contagio del SARS-COV-2, teniendo en cuenta la situación absolutamente excepcional y de urgencia que generó; no pueden los derechos del trabajador verse restringidos al cumplimiento estricto de los requisitos formales exigidos por el artículo 1° de la Resolución 38/20. La precipitación de los hechos, en el sentido del avance del agravamiento del Sr. Abregu, fueron de tal premura que mal podría en aquellas circunstancias, exigirse el cumplimiento de los referidos requisitos formales ante la Comisión Médica, a fin de no ver vulnerados sus derechos. En cuanto a los requisitos que tiene que cumplir el trabajador conforme la resolución 38/20 SRT (art 1) además del diagnóstico expedido por autoridad inscripta en el registro federal de establecimientos de salud (nada fácil de obtener) deberá también acompañar: constancia de dispensa del empleador (artículo 6 del DNU 297/2020), la denuncia de siniestro, datos de identidad del trabajador y del empleador, deberá realizar una descripción en cuanto al puesto de trabajo y jornada de trabajo. En caso de aceptar el siniestro se deberán brindar las prestaciones dinerarias y en especie donde el empleador deberá abonar las mismas durante los primeros 10 días y a partir del día número once estará a cargo de las Arts. A modo de conclusión podemos observar como el escenario del DNU 367/20 y de la resolución 38/20 de la SRT crea un laberinto de múltiples barreras que el trabajador deberá superar -primero con la ART, luego con la SRT , la Comisión médica jurisdiccional, la Comisión médica Central y por ultimo con la justicia-. Este panorama abordado no parece ser claramente el mejor para el trabajador, a quien conforme el art 8 y 25 del

Pacto de San José de Costa Rica se le debe garantizar el acceso irrestricto a la justicia, que con este sistema no se encuentra garantizado con tantos obstáculos que el trabajador debe superar; más aún, tratándose de uno de los derechos más importantes que tiene todo ser humano, el derecho a la salud. Todo ello conlleva a un gran laberinto jurídico que lejos está de proteger al trabajador pues implica una clara negación a la tutela judicial efectiva, sabiendo que el trabajador es sujeto de preferente tutela como ya lo ha resuelto nuestro máximo tribunal en el precedente Vizzoti. S.S., el hecho de que el conyuge de mi poderdante no haya tenido la posibilidad (repito, dado la precipitación de la gravedad con la que el virus afecto al Sr. Abregu) de seguir el tramite establecido por esta Resolución no puede ser considerado un obstáculo para la procedencia de la presente acción, siendo inconstitucional el referido procedimiento, viéndose soslayado, entre otros, el derecho constitucional de acceso a la justicia y el derecho a la salud.

**V - PLANILLA.-**

**Datos formula ART**

Fallecimiento

- ☐ Cálculo de la indemnización: 53 x Ingreso Base Mensual x 65/edad.
- ☐ Prestación adicional de pago único por tratarse una enfermedad profesional: 20%

**EDAD: 61 AÑOS.-**

**IBM: \$ 51.475.83.-**

**PORCENTAJE DE INCAPACIDAD: 100%.-**

**INDEMNIZACION: \$6.149.691,72.-**

**PAGO ADICIONAL UNICO: \$1.229.938.-**

**TOTAL: \$7.379.629**

## **VI- RESERVA DEL CASO FEDERAL**

Siendo ésta la primera oportunidad procesal para hacerlo, dejo formuladas reservas para hacer uso de la vía del recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso se deja planteado, atento a la eventualidad de que la sentencia de grado no hiciere lugar a lo petitionado, se encontrarían gravemente conculcados derechos y garantías de raigambre constitucional tales como los consagrados por los Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 17 y 19 de la Constitución Nacional.-

## **VII- OFREZCO PRUEBA DOCUMENTAL**

A).- Cumpliendo con el imperativo procesal adjunto la siguiente documentación:

1. Poder Ad litem

2. Sentencia de información sumaria de convivencia de fecha 13/10/2022, juicio "GORDILLO SILVIA CAROLA S/ INFORMACION SUMARIA. Expte.: 23/22, Juzgado: Civil y Comercial Comun de la II Nom.".

3. Acta de defunción.-

3. Recibos de sueldo de marzo/2021, abril/2021 y mayo/2021.-

4. Denuncia de siniestro a la Caja Popular de Ahorros.

## **VIII.- INFORMATIVA: solicito se oficie:**

1.- Al Hospital de Aguilares, para que envíe historia clínica del Sr. Alberto Antonio Abregu, DNI 13.513.840.-

2.- Al Sanatorio Mayo de la ciudad de Concepción, a fin de que remita historia clínica del Sr. Alberto Antonio Abregu, DNI 13.513.840.-

3.- Al SeSOP (Servicio de Salud Ocupacional Provincial) a fin de que remita el historial de las licencias solicitadas por el Sr. Alberto Antonio Abregu, DNI 13.513.840 en Mayo del año 2021.-

### **IX.- PETITORIO**

Por las razones expuestas a V. S. respetuosamente pido:

1. Se me tenga por presentada por parte, en el carácter invocado y con domicilio digital constituido.-
2. Se corra traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley.-
3. Se tenga por ofrecida la prueba documental. Se reserve en Caja Fuerte del Juzgado la documentación original acompañada, dejándose copia en autos.
4. Se Oficie conforme se peticiona.
5. Se declaren las inconstitucionalidades incoadas.-
6. Por efectuada la RESERVA DEL CASO FEDERAL.-
7. Oportunamente, haga lugar a la demanda en todas sus partes ordenando abonar a la demandada la suma que se reclama con más sus intereses, gastos y costas.-

**JUSTICIA.-**